

Santiago, a once de septiembre de dos mil veinticuatro.

Vistos:

En esta causa RIT N° 470-2023 y RUC N° 2100061933-4 del Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, por sentencia de veintisiete de mayo de dos mil veinticuatro, se condenó a Marco Antonio Poblete Lara a la pena de siete años de presidio mayor en su grado mínimo, con cumplimiento efectivo, y al pago de una multa de cuarenta unidades tributarias mensuales, más las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autor del delito consumado de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, previsto y sancionado en el artículo 3°, en relación con el artículo 1°, ambos de la Ley N° 20.000, perpetrado el 21 de octubre de 2021, en la comuna de Lo Espejo.

En contra de esa decisión, la defensa del acusado interpuso recurso de nulidad, el que se estimó admisible por este Tribunal y se conoció en la audiencia pública celebrada el día veintidós de agosto del presente año, como da cuenta el acta que se levantó con la misma fecha.

Considerando:

1º) Que el recurso deducido por la defensa invoca como única causal la contemplada en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, atendida la actuación oficiosa efectuada por el tribunal, la que consistió en la incorporación de antecedentes probatorios que no fueron ofrecidos ni incorporados por los intervinientes durante el desarrollo del juicio oral, precisamente el extracto de filiación y antecedentes del acusado, documento que los sentenciadores utilizan



para dar por acreditado tanto la existencia del delito como la participación del acusado.

Explica que durante la audiencia de juicio no se rindió como medio de prueba el extracto de antecedentes del acusado, lo que sólo aconteció en la audiencia del artículo 343 del Código Procesal Penal, la que se llevó a cabo una vez concluida la deliberación privada de los jueces y dictado el veredicto condenatorio.

Por ello, el tribunal razona sobre la base de un antecedente que no fue aportado ni ofrecido por los intervinientes, sino que se incorporó en un momento posterior a la deliberación, sin que la defensa pudiese ser oída, especialmente respecto al domicilio que figuraba en dicho instrumento, por cuanto no formó parte del debate en el juicio oral.

Lo anterior, se traduce en una infracción a las normas sobre las que descansa un proceso justo y legalmente tramitado, así como a los principios de contradicción, imparcialidad y pasividad del Juzgador, y que permite que se le impute que las especies encontradas en el inmueble de calle Veracruz N° 4914, comuna de Lo Espejo, le pertenecían y que fundan la calificación jurídica de los hechos como un delito de tráfico de sustancias estupefacientes, sancionado en el artículo 3° de la Ley N° 20.000.

Indica que, si se le hubiese condenado solo por las especies y sustancias incautadas en la propiedad de calle 5 Poniente N° 6068, comuna de Lo Espejo, la calificación jurídica probablemente hubiese sido de un delito de tráfico de pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes, sancionado en el artículo 4° de la Ley N° 20.000, que tiene una pena menor.



Añade que la infracción referida llevó también al Tribunal a tener por acreditada la participación del imputado al considerar sus antecedentes pretéritos, a los cuales tuvo acceso por una actuación oficiosa, realizada fuera de audiencia y sin que la defensa pudiera realizar alegaciones. Concluye

solicitando la nulidad del juicio y la sentencia, debiendo disponerse que el procedimiento se retrotraiga hasta el estado procesal de realizarse un nuevo juicio oral por un tribunal no inhabilitado, determinando que el estado en que debe quedar el procedimiento es el de fijarse nuevo día y hora para la realización del juicio oral ante tribunal no inhabilitado;

2º) Que, la sentencia impugnada, en su basamento décimo, tuvo por acreditado los siguientes hechos:

“Que desde fines del año 2020, por diligencias realizadas por la Brigada Antinarcóticos Metropolitana Sur se estableció que un grupo familiar compuesto por padre, madre, tres hijos y también por terceros cercanos, se estaban dedicando al tráfico de drogas en diversos domicilios ubicados especialmente en la comuna de Lo Espejo y la Cisterna, donde en algunos se cumplían funciones de recolección de dinero, producto de la venta de drogas, también al acopio, dosificación y distribución de sustancias estupefacientes, por lo que con fecha 19 de mayo de 2021, en horas de la mañana, en cumplimiento a las respectivas órdenes judiciales de entradas y registros a diversos domicilios que habían sido sindicados como lugares en que se incurría en estos ilícitos, funcionarios policiales ingresaron a ellos, arrojando resultados positivos en torno a la incautación de cocaína base , cannabis sativa, cartuchos balístico, dinero y elementos para la dosificación de droga, procedimientos en que a su vez



resultaron detenidos varias de las personas relacionadas a este grupo familiar, sin que en dicha oportunidad fuera habido Marco Antonio Poblete Lara, apodado como el Huaso, quien también era objeto de búsqueda, prosiguiendo los funcionarios policiales con la realización de diversas diligencias a su respecto, logrando determinar que esta persona continuaba ejecutando acciones ligadas al acopio y distribución de droga, utilizando para tal efecto dos domicilios ubicados en el Pasaje Cinco Poniente N° 6068 y en calle Veracruz N° 4914, ambos de la comuna de Lo Espejo, por lo que el día 21 de octubre de 2021, en horas de la mañana, personal policial, en cumplimiento de las órdenes judiciales de entrada y registro y además de una orden de detención decretada en su contra, ingresó al primero de los inmuebles, deteniendo a MARCO POBLETE LARA, incautando desde su dormitorio 01 bolsa contenedora de cocaína base con peso bruto de 49 gramos; 01 bolso contenedor de 321 envoltorios de cocaína base con peso bruto de 66 gramos; \$ 49.000 producto de la venta de droga.

Asimismo, en forma conjunta personal policial ingresó al domicilio ubicado en la calle Veracruz N° 4914, incautando desde un dormitorio que el acusado Poblete Lara ocupaba durante el día, envoltorios de papel alusa contenedores de cannabis sativa con peso bruto de 18 gramos; sobre un plato se incautó 06 envoltorios de papel contenedores de cocaína base con peso bruto de 01 gramo; en una cajonera la suma de \$ 190.270 producto de la venta de droga y cocaína base sobre un papel con peso bruto de 14 gramos; en otra cajonera se incautó 01 envoltorio contenedor de cocaína base con peso bruto de 68 gramos, 01 bolsa contenedora de cocaína base con peso bruto de 425 gramos, 01 bolsa de cartón contenedora de 3 paquetes y otra bolsa con 6 contenedores, todos con cocaína



base con peso bruto de 2 kilos 794 gramos; asimismo se incautó 01 envoltorio de plástico contenedor de cannabis sativa con peso bruto de 27 gramos Toda la droga que era guardada y poseída por MARCO POBLETE LARA sin contar con la autorización competente.” (sic).

Estos hechos fueron calificados como un delito consumado de tráfico de sustancias estupefacientes, previsto y sancionado en el artículo 3 en relación con el artículo 1 de la Ley N° 20.000;

3°) Que, en lo referente a la causal invocada que se sustenta en la infracción al artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, se debe tener presente que, con relación al agravio a la garantía del debido proceso, esta Corte ha resuelto uniformemente que debe ser real, en cuanto perjudique efectivamente los derechos procesales de la parte, esto es, que entrase, límite o elimine su derecho constitucional al debido proceso.

Asimismo, este tribunal ha señalado que la infracción producida a los intereses del interviniente debe ser sustancial, trascendente, de gravedad, de tal modo que el defecto sea, en definitiva, insalvable frente al derecho constitucional del debido proceso, por cuanto la nulidad que se pretende, en tanto constituye una sanción legal, supone un acto viciado y una desviación de las formas de trascendencia sobre las garantías esenciales de una parte en el juicio, en términos que se atente contra las posibilidades de actuación de cualquiera de los intervinientes en el procedimiento. (SCS Roles N° 2866-2013, N° 4909-2013, N° 21408-2014, N° 4269-19, N° 76689-20, N° 92059-20 y N° 112392-20).

En este entendido, la declaración de nulidad requiere que sea formalmente establecida alguna actuación defectuosa que sirva de fundamento a la invalidez,



pues de ésta han de derivar las consecuencias lesivas para el ejercicio de los derechos de que se trate, y que, a estos efectos se entiendan vinculados al artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal;

4º) Que, en particular, en relación a los reproches efectuados por la defensa del imputado, es del caso subrayar que, tal como recientemente ha dicho esta Corte Suprema frente a presentaciones similares, las argumentaciones formuladas por la asesoría letrada, tienen el carácter de genéricas y abstractas, esto es, dicen relación con alegaciones predicables a todos los juicios de esta clase, y por ello, aquel planteamiento que se hace a este tribunal, claramente, no deriva de la realidad del juicio que nos ocupa.

En este aspecto, lo único concreto que se alega, es que el tribunal habría producido prueba en forma autónoma, al dar por acreditado que el inmueble donde se encontró la mayor cantidad de droga correspondía al domicilio del imputado, acudiendo para ello a su extracto de filiación y antecedentes, el que no había sido incorporado durante el desarrollo del juicio oral, documento que también habría servido para dar por comprobada su autoría, al considerar los antecedentes penales que se mencionan en él, lo que constituye una trasgresión a los principios de contradicción, imparcialidad y pasividad del juzgador, infringiendo de esta manera la garantía del debido proceso.

Sin embargo, no precisa acabadamente cómo aquellas circunstancias habrían determinado la decisión de condenar al acusado, en especial considerando que sus alegaciones se refieren únicamente al extracto de filiación y antecedentes del imputado, el que solo fue incorporado en la audiencia de determinación de pena y, por consiguiente, posteriormente a la comunicación del



veredicto, pero sin establecer que estos vicios afectaran a los demás medios de prueba que se rindieron en el juicio oral, tales como testigos que dieron cuenta del procedimiento policial realizado, principalmente vigilancias a los domicilios donde encontraron la droga, como de la actividad desplegada por el acusado en ellos referente a las sustancias estupefacientes, esto es, que declararon sobre lo sucedido y la responsabilidad del imputado en los hechos, así como se incorporó prueba documental y registros de interceptaciones telefónicas, que también corroboran lo expresado por esos testigos, conforme lo señalan los motivos noveno y undécimo de la sentencia recurrida.

El recurso omite, entonces, referir por la defensa cómo la vulneración a las garantías que se señalan infringidas influyó causalmente en el resultado del juicio, en especial considerando que existían las declaraciones de testigos que la defensa pudo contrainterrogar en el juicio oral sin inconvenientes, así como documentos y registros de interceptaciones telefónicas que corroboran lo expresado por ellos y que se refieren a la participación de Poblete Lara;

5°) Que, en consecuencia, por los fundamentos previamente desarrollados y no bastando la afirmación genérica de la vulneración de la garantía del debido proceso, sin que se haya explicitado por el recurrente el sustento fáctico y la sustancialidad de la pretendida vulneración a esos derechos, el recurso habrá de ser desestimado.

Por estas consideraciones y de acuerdo también a lo establecido en los artículos 373 letra a) y 384 del Código Procesal Penal, se rechaza el recurso de nulidad interpuesto a favor del sentenciado Marco Antonio Poblete Lara en contra de la sentencia de veintisiete de mayo de dos mil veinticuatro, dictada en los



antecedentes Ruc N° 2100061933-4 y Rit N° 470-2023 y el juicio oral que le antecedió del Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, los que, en consecuencia, no son nulos.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Llanos.

N° 19688-2024.

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., la Ministra Sra. María Cristina Gajardo H., y las Abogadas Integrantes Sras. Pía Tavorari G. y Andrea Ruiz R. No firma el Ministro Sr. Valderrama, no obstante haber estado en la vista y en el acuerdo del fallo, por estar con licencia médica.



En Santiago, a once de septiembre de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

